

Los viejos problemas y las nuevas políticas en el Plan Distrital de Desarrollo

Óscar A. Alfonso R.*

Que los estudiantes de las universidades se preocupen por el futuro de la ciudad es algo tan inusual como alentador. Cuando se decidía a protestar, mi generación se dedicaba a marchar por las calles y, en no pocas ocasiones, los “tirapiedras” se envalentonaban para intentar descalabrar a algún policía; en otras más escasas, urdíamos algún plan para ridiculizar a alguna figura del gobierno. Ahora es cada vez más frecuente depararse en las calles con la artillería de las actuales generaciones en un fuego cruzado con los del Esmad, con pintas grotescas en las paredes hechas para hostilizar a los transeúntes y con presencia de niños y adolescentes incautos inducidos a combates en los que están dispuestos a perder alguna extremidad manipulando armas en la lucha por unas causas que ni siquiera comprenden. Y al final, ¿qué se ha logrado solucionar con la violencia? Nada; por el contrario, su



Fotografía: Henry Sánchez

uso ha empeorado la vida de miles de colombianos y ha dejado mutilados a un sinnúmero de estudiantes. Los foros públicos en los que los estudiantes de las universidades bogotanas han debatido las bases como el articulado preliminar del Plan Distrital de Desarrollo, me alientan a pensar que hay alternativas diferentes a la violencia para tratar los problemas públicos y para enfrentar creativamente las desavenencias; por supuesto, esto es más difícil que tirarle pintura al edificio de Ecopetrol.

* Profesor Titular e Investigador de la Universidad Externado de Colombia. Correo-e: oscar.alfonso@uexternado.edu.co.

Los foros públicos y los paneles de debate al Plan Distrital de Desarrollo no han sido un monólogo de la administración entrante de la ciudad pues, en efecto, las orientaciones de los estudiantes se han encargado de imprimirle pluralidad y, por tanto, han representado un desafío intelectual para quienes allí hemos participado.

En particular, yo entiendo que la novedad de las bases del PDD radica en la revelación de la *segregación residencial* como el problema crucial a enfrentar con las políticas distritales, en el entendido de que por esa vía se podría producir una nueva manera de intervenir en la notable desigualdad que campea en Bogotá y, a la vez, las políticas de equidad territorial tendrían una plataforma institucional de la que emerjan reglas y acuerdos más eficaces para reducir significativamente la pobreza. A este respecto, el programa emblemático de la actual administración es la producción residencial para hogares pobres en el “Centro Expandido” de la ciudad. En su dimensión espacial, ese Centro no es ni el Centro Histórico ni el Centro Tradicional; es un “nuevo” Centro que incluye a una porción considerable de la ciudad y a otras franjas distantes de la propiamente central. Por tanto, estamos en presencia de una innovación en la visión funcional de Bogotá que es proclive a un programa que, la verdad sea dicha, no es tan osado como se piensa. Si socialmente

es deseable que pobres y ricos vivan en proximidad, lo verdaderamente osado sería realizar programas de vivienda popular en el Chicó Reservado, en Multicentro o en La Cabrera, por ejemplo. Claro, a eso se oponen los discursos de expertos en el mercado del suelo que proclaman a diestra y siniestra que eso no se puede hacer.

Una de las directrices de la Corona Española a los conquistadores era que el suelo —los solares— de las ciudades fundadas debía ser repartido de acuerdo con la “calidad de las personas”, de manera que la *segregación residencial* es un legado ibérico que debe ser combatido con el mismo ingenio y coraje que nos libertó, pero con los instrumentos modernos que nos alejan de los arcabuces, de las papas-bomba y del gas lacrimógeno. El instrumento más eficaz es la universalización de los bienes públicos y, por supuesto, la ampliación de las posibilidades de un trabajo digno, esto es, con la estabilidad, remuneración y jornada que la ciudad requiere para crecer de manera equitativa. Por tanto, la cuestión no se reduce meramente a que unos cuantos hogares pobres consigan residir al lado de los ricos, como ocurre en algunas zonas de Usaquén o de Chapinero, sino que los hogares que residen en San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba o en cualquier otra zona de expansión popular, cuenten con las mismas dotaciones públicas de los vecindarios ricos.

Las condiciones de *habitabilidad* han mejorado con la casi universalización del servicio de acueducto y alcantarillado sanitario, pero la ausencia de alcantarillado pluvial se torna, con las anomalías en el clima propias de la variabilidad climática, en un factor adicional de penuria para los hogares populares de la ciudad. El POT de Bogotá debe enfrentar esta ausencia y, además, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tendrá que emplear sus excedentes financieros en su construcción. La penuria en las condiciones de *movilidad* de la ciudad es grave en especial a los hogares con jefes de hogar con contratos laborales flexibles. En Bogotá no se necesita un metro ligero pues la prioridad es la movilización de millones de pasajeros a diario que exige una tecnología compatible y un trazado coherente. En el costado nor-oriental de la ciudad residen hogares de muy altos ingresos que jamás emplearán el metro por dos razones: han invertido mucho dinero en soluciones residenciales dotadas de hasta 10 garajes para otros tantos vehículos particulares y, además, lo han hecho porque no están dispuestos a compartir el transporte público con los pobres. Por tanto, el trazado desde el nor-occidente, pasando por el centro tradicional, no el expandido, y concluyendo en el borde sur-occidental, es el más requerido y el que facilitaría un cierre financiero con una tarifa costeable para los sectores populares bogotanos.

Las condiciones de *sociabilidad* en Bogotá están en franco deterioro. Además de la ausencia de elementos constitutivos del espacio público urbano suficientes para atender las necesidades colectivas de los residentes en la ciudad, la calidad de la educación enfrenta graves problemas. La extensión de la jornada es un propósito loable, como también lo es la revisión del contenido programático. En aras de la competitividad se ha puesto interés en las reformas que promuevan el bilingüismo y el dominio de las matemáticas, pero esos saberes de poco o nada le sirven a miles de personas a las que la sociedad no les garantiza el ingreso rápido a la educación superior o al trabajo. En el intertanto, esos énfasis han conducido al deterioro de la formación humanística y, en especial, de la difusión de valores como el del respeto por la diferencia o el valor ético de la vida que encuentran en el colegio, y no meramente en el hogar, el lugar propicio para ser aprehendidos por los niños y por los adolescentes.

Pero el esquema general de segregación socio-espacial ya ha adquirido contornos metropolitanos y el modelo territorial de Estado, basado en el municipalismo y sus autonomías, no permite enfrentarlo con eficacia. La interacción de la población sabanera con Bogotá ha alcanzado grandes proporciones, de manera que las acciones de los gobiernos son cada vez más

interdependientes. Una buena realización en Bogotá puede ser contrarrestada y hasta anulada por una mala decisión de algún gobierno municipal de la Sabana, y viceversa. El PDD es extremadamente tímido en reconocer esa dimensión metropolitana de la vida cotidiana y, además, veo con preocupación la inoperancia del sistema para resolver los problemas tras-

centadales de esta gran aglomeración urbana. En tal sentido, concluyo sugiriendo un nuevo escenario institucional: que Bogotá adelante una reforma territorial que equilibre las localidades en tamaño poblacional y densidad de ocupación, y que el Departamento de Cundinamarca haga su parte promoviendo la creación de la Provincia de la Sabana de Bogotá.